

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por la Señora Doña María Concepcion Pinzon de Cobo, contra los actos del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, C. Lic. Ignacio de L. Trejo, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El C. Gefe, en ejercicio de la Promotoría fiscal, dice: que Doña María de la Concepcion Pinzon de Cobo, ha solicitado se le ampare contra la disposicion del Tribunal Superior del Estado, que le impuso una multa en un negocio judicial que sigue contra D. Luis Laugier. Funda su peticion en la ilegitimidad del C. Ministro Lic. Ignacio de Loyola Trejo, cuyo nombramiento adolece en su concepto, de vicios electorales. Sin abrogarse la facultad que los congresos tienen para proceder á la calificación de los nombramientos de los miembros del Poder judicial, no puede el Juzgado dar sentencia sobre un punto ya decidido por la autoridad competente.

En consecuencia, sería preciso interrumpir el orden y economía de los poderes, cuya distincion forma un principio elemental de nuestra Constitucion, para volver á ocuparse de la legalidad de un acto ejercido por la legislatura, con arreglo á sus facultades. Y es de advertir que nuestra organizacion política, concede á los Estados una perfecta soberania en lo tocante á su régimen interior. Con todo, como en el caso parezca excesiva la multa impuesta á la Señora Pinzon de Cobo, que segun parece carece de bienes para cubrirla, se encuentra su peticion comprendida en el artículo 22 de la Constitucion.

Por lo expuesto, el que suscribe pide: se niegue el amparo solicitado por ilegitimidad del funcionario que impuso la multa, y

se conceda, si durante el término de prueba apareciere esta excesiva.

Querétaro, 16 de Julio de 1873.—Juan Urvina.

Sentencia del C. Juez de Distrito

México, Setiembre 29 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por la Señora Doña María Pinzon de Cobo, contra los actos y multa de cincuenta pesos que tuvieron lugar, é impuso el C. Lic. Ignacio de L. Trejo, que funge de Magistrado del Superior Tribunal de Justicia del Estado, cuyos actos y multa tuvieron lugar con motivo de una recusacion que hizo la quejosa en un juicio verbal que le promovió D. Luis Laugier, ante el Juez primero de Letras de esta Capital, alegando la Señora Pinzon la absoluta falta de autoridad en el Lic. Trejo, por no ejercerla en virtud de nombramiento popular. Visto el informe rendido por la autoridad ejecutora; la prueba que produjo la parte actora; lo alegado por el C. Promotor, la citacion para sentencia, con todo lo demas que verse convino.

Considerando: que la Señora Pinzon de Cobo, funda su derecho para pedir el amparo en la falta absoluta de autoridad que hay en el Sr. Trejo, por disponer la Constitucion del Estado, que los Magistrados del Tribunal del mismo sean electos popularmente, (artículo... de la Constitucion local del propio Estado) de cuyo requisito carece ese Sr., de donde resulta violado en la persona que se queja é impetra el amparo, el artículo 16 de la Constitucion general de la República, que previene que nadie sea molestado en su persona é intereses, sino por autoridad competente.

Considerando: que ni al informar el Sr. Trejo rindió prueba de ejercer su empleo por eleccion popular, ni tampoco el Fiscal dedujo alguna con que tal se probara.

Considerando: que la Señora Pinzon con el certificado que obra á fojas... ha proba-

do que la eleccion del Sr. Trejo procedió de la Legislatura del Estado, sin referencia á elecciones populares, pues aunque consta de ese mismo certificado que al Ejecutivo se le facultó para que determinara esas elecciones, no existe ni convocatoria para ellas, ni señalamiento de día, de donde se sigue que no pudo haberla.

Considerando por último: que aunque la calificación sobre elecciones populares, reservada por el artículo... de la misma Constitución local á la Legislatura de este Estado, en nuestro caso no se trata de calificar esas elecciones, sino de declarar que por no haberlas habido, el C. Lic. Ignacio de L. Trejo, no puede ejercer la autoridad de Magistrado que solo pudo recibir del pueblo, cosa que ni está al arbitrio de la autoridad judicial resolver.

Por tales fundamentos, y de conformidad con los artículos 101 y 16, de la Constitución general, y el primero de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia federal ampara y protege á la Señora Doña María Concepcion Pinzon de Cobo, contra los actos del C. Lic. Ignacio de L. Trejo que fungió de Ministro del Superior Tribunal de Justicia del Estado, y tuvieron lugar en el juicio que promovió á la quejosa D. Luis Laugier, y contra la multa de cincuenta pesos, que el mismo Trejo impuso á dicha Señora. Hágase así saber á las partes, previniéndose á la actora reponga con el papel del sello correspondiente, el común de que se usó en este expediente; remítanse copias de este fallo y alegatos fiscales al redactor del Semanario Judicial para su publicacion, y esto hecho, elévese este expediente á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos para su revision.

Así definitivamente juzgando, lo pronunció mandó y firmó el C. Juez segundo suplente de Distrito, Lic. Juan María Vega, por ante mí de lo que doy fé.—*Juan María Vega*.—*Francisco Ruiz*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 6 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por la Señora Doña María Concepcion Pinzon de Cobo, contra los actos del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, C. Lic. Ignacio L. Trejo, quien sentenciando una recusacion con causa, condenó á la Señora Pinzon al pago de una multa de cincuenta pesos, y las costas causadas en ese recurso, con cuyo acto considera violadas en su persona é intereses las garantías que le otorga la Constitución federal, en sus artículos 14 y 16. Vista la sentencia pronunciada por el Juez segundo suplente de Distrito de Querétaro, concediendo el amparo, y cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que la causa que la quejosa alega para decir de nulidad en los procedimientos del Magistrado Trejo, es la de no haber sido su nombramiento de eleccion popular, conforme á las prevenciones de la Constitución particular del Estado, cuyo hecho está acreditado en autos, sin haberse contrariado este aserto por el Magistrado, ni menos probado lo contrario, pues en su informe al Juzgado de Distrito, se limita á manifestar que no era del caso averiguar su eleccion ó nombramiento.

Considerando en cuanto á la incompetencia objetada por la quejosa á dicho Magistrado: que tal incompetencia llamada de origen por el vicio que se atribuye al nombramiento de Magistrado, debe considerarse comprendida como cualquiera otra en el artículo 16 de la Constitución federal, puesto que ella no hace distincion ni escepcion alguna.

Que admitir una distincion y escepcion por salvar la independencia y soberanía de los Estados en su régimen interior, menospreciando al individuo quejoso, sería sacrificar los derechos del hombre que son el fin,

á la institucion que es el medio (artículo primero de la Constitución.)

Que para mayor garantía de los derechos del hombre, la independencia misma y la soberanía de los Estados se encuentra restringida por el artículo 109 de la Constitución federal, que les impone el deber de adoptar la forma de gobierno representativo popular; de manera, que se vería infringido además este precepto constitucional, si la incompetencia que se objeta á la autoridad, fuera por su origen contraria á esa forma de gobierno.

Que por tales razones, y para no dejar violada una garantía individual ni quebrantado un precepto constitucional, se hace indispensable entrar en el examen, de si el Magistrado Trejo ha sido bien nombrado bajo el punto de vista de la Constitución federal.

Que una vez impuesta á los Estados la forma de gobierno representativo popular, y consistiendo esta forma esencialmente, en que por lo menos, los Poderes Supremos sean electos como se consignan por la misma Constitución del Estado, es consecuente que el Magistrado de que se trata, no puede ser nombrado sino por elección popular, ó de lo contrario será incompetente.

Por estas consideraciones, y por los propios legales fundamentos en que se apoya la sentencia de Juzgado de Distrito, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del inferior, que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á la Señora Doña Concepcion Pinzon de Cobo.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez, el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José Maria Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Gar-

za.—José M. Lozano.—José Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José Garcia Ramirez.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 10 de 1873.—Lic. Enrique Landa, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por el C. Andres Serrato, contra el Gobierno del Estado que lo destituyó del empleo de Procurador de primera instancia, sin formación de causa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez segundo de Distrito.

En el juicio de amparo que ha promovido el C. Lic. Andres Serrato, contra el Gobernador del Estado, por haberlo destituido del empleo de procurador de primera instancia de esta Capital, hay ciertas constancias que comprueban los hechos siguientes: que el nombramiento que se hizo de la persona del quejoso para que desempeñara el ministerio público, fué con total arreglo á la fracción 13 del artículo 74 de la Constitución particular del Estado y del artículo tercero de la ley de 12 de Junio de 1871; que una vez nombrado, en virtud del artículo quinto de esta ley, adquirió un derecho robusto para desempeñarlo por el término de seis años; y que durante este tiempo, no podía ser removido arbitrariamente de ese destino, segun prevencion expresa del artículo 149 de la Constitución citada.

Ahora bien: ¿la destitucion que ha determinado el Gobernador y que sirve de fundamento á este recurso, puede reputarse de algun modo que es legal? ¿no se opone á las garantías qua la Constitución general